

## **ACUERDO DE REENCAUZAMIENTO**

### **JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO**

**EXPEDIENTE:** SUP-JDC-59/2018

**ACTOR:** RAMIRO ZARAGOZA  
RAMÍREZ

**ÓRGANO RESPONSABLE:** COMISIÓN  
ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO  
NACIONAL DEL PARTIDO DE LA  
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

**MAGISTRADO PONENTE:** REYES  
RODRIGUEZ MONDRAGÓN

**SECRETARIO:** RODOLFO ARCE  
CORRAL

Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.

**ACUERDO** que **reencauza** la demanda del juicio ciudadano al rubro indicado, a medio de impugnación intrapartidista ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que el medio partidista puede agotarse sin que esto genere alguna afectación irreparable a los derechos del actor.

## **GLOSARIO**

<b>Comisión Jurisdiccional:</b>	Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática
<b>Juicio ciudadano:</b>	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
<b>Ley de Medios:</b>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<b>Ley Orgánica:</b>	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
<b>PRD:</b>	Partido de la Revolución Democrática
<b>Reglamento Interno:</b>	Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder

## **1. ANTECEDENTES**

De lo narrado en la demanda y de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

**1.1. Acuerdo ACU-CECEN/214/FEB/2018.** El nueve de febrero<sup>1</sup> la Comisión Electoral emitió la lista de observaciones de las y los consejeros nacionales del Partido de la Revolución Democrática, para la celebración del Décimo Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional con carácter electivo de candidatas y candidatos a senadoras y senadores y diputadas y diputados federales de mayoría relativa y representación proporcional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, que tendría verificativo el inmediato día once.

En dicha lista el actor aparece en el número trescientos siete, por el estado de Chiapas Guanajuato.

**1.2. Acuerdo impugnado.** El diez de febrero, mediante acuerdo ACU-CECEN/228/FEB/2018, la Comisión Electoral emitió la lista definitiva de Consejeros Nacionales mencionados en el numeral que antecede.

En la citada lista, el actor no aparece como Consejero Nacional y en su lugar se encuentra Germán Fabian Coloca Mendoza.

**1.3. Juicio ciudadano.** El quince de febrero, el actor promovió, *per saltum*, juicio ciudadano a fin de impugnar el acuerdo mencionado en el párrafo precedente.

**1.4. Integración, registro y turno.** El mismo día, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar el expediente del

---

<sup>1</sup> Salvo mención expresa todas las fechas corresponden a dos mil dieciocho

juicio ciudadano SUP-JDC-59/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

## 2. ANÁLISIS DEL ASUNTO

### 2.1. Actuación colegiada.

La materia de este acuerdo compete, de manera colegiada, a la Sala Superior, pues constituye una determinación trascendente para el trámite del presente asunto, ya que se debe determinar el curso que se ha de dar a la demanda presentada por el actor en contra de una determinación partidista.<sup>2</sup>

### 2.2. Improcedencia de la vía *per saltum* y reencauzamiento.

En su escrito de demanda, el actor aduce que el acuerdo impugnado está indebidamente fundado y motivado porque se le priva ilegalmente del cargo de Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Asimismo, pide a esta Sala Superior que acepte el conocimiento *per saltum* del asunto, sin agotar la instancia partidista de *queja contra órgano* porque, en su concepto, se corre el riesgo de que se le impida participar en los asuntos del aludido Consejo Nacional.

Esta Sala Superior considera que **no es procedente** conocer *per saltum* el juicio ciudadano promovido por el actor, al no colmarse los supuestos requeridos para tal efecto.

---

<sup>2</sup> Véase la tesis de jurisprudencia 11/99, de rubro: "**MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR**". TEPJF, "Compilación Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013", Tomo Jurisprudencia, páginas 447 a 449.

Los artículos 79, apartado 1; 80, párrafo 1, inciso f) y párrafo 2, y 86, párrafo 1, incisos a) y f), del mismo ordenamiento legal se prevén que el juicio ciudadano solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y llevado a cabo las gestiones necesarias para ejercer el derecho que considera vulnerado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para ese efecto, es decir, cuando se haya cumplido con el principio de definitividad.

La exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables de -en su caso- modificar, revocar o anular los actos controvertidos.

Sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinario, los interesados deben agotar previamente medios de defensa e impugnación viables.

Al respecto, se tiene por colmado dicho requisito únicamente cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, al advertirse que los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones, efectos y consecuencias.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Véase la tesis de jurisprudencia 9/2001, de rubro "**DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO**". Consultable en *Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Compilación 1997-2013*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia. Volumen 1, páginas 272-274.

Ello sucede cuando el tiempo de tramitación y resolución de la impugnación partidista o legal, implique una merma considerable o la extinción de las pretensiones, efectos o consecuencias pedidas.

De manera que, por regla general, los ciudadanos que presentan una demanda deben agotar las instancias legales o partidistas previas al juicio ciudadano constitucional, por lo que el conocimiento directo y excepcional, *per saltum*, debe estar justificado.

Como se expuso, en el caso particular no se satisface la hipótesis de excepción reconocida como *per saltum*.

La normativa partidista contempla un recurso intrapartidista para controvertir el acuerdo señalado por el actor, el cual es de la competencia de la Comisión Jurisdiccional, denominado *queja contra órgano*, procedente, en general, contra los actos u omisiones que emiten los órganos partidistas que pueden afectar, entre otros, derechos de los afiliados.

El recurso de *queja contra órgano*, en términos del artículo 81 del Reglamento de Disciplina Interna del PRD<sup>4</sup>, en general, procede *contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido*, que vulneren derechos de las personas afiliadas al partido político o a los integrantes de los mismos.

Al respecto, el actor aduce que el acto controvertido vulnera su derecho como militante dado que se le priva del cargo de Consejero Nacional de ese instituto político.

Por tanto, es claro que el conocimiento y resolución de la presente controversia encuadra en los supuestos que son materia de la queja contra órgano.

---

<sup>4</sup> De las Quejas contra Órgano. Artículo 81. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o a los integrantes de los mismos.

Ahora bien, en el presente caso el actor alega que de acudir a agotar la instancia referida no alcanzaría el tiempo para “recuperar el derecho que en forma legítima me corresponde”, sin embargo, no le asiste la razón, pues el medio partidista puede agotarse sin que esto, en sí mismo, genere alguna afectación irreparable en sus derechos.

Esto es así, porque esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada<sup>5</sup> que los actos intrapartidistas, por su propia naturaleza **son reparables**, pues la irreparabilidad no opera en los actos y resoluciones emitidos por los institutos políticos, sino sólo en aquéllos derivados de alguna disposición Constitucional o legal como puede ser, por ejemplo, las etapas de los procesos electorales previstos constitucionalmente.

En este sentido, al no ser el acto impugnado de los previstos en alguna disposición Constitucional o legal, debe estimarse, que la reparación del acto materia de impugnación sería posible jurídica y materialmente.

Tampoco se advierte que el órgano partidista competente esté imposibilitado de analizar y pronunciarse sobre la pretensión del actor, atendiendo a la posible afectación injustificada de sus derechos de militante.

---

<sup>5</sup> El criterio en cuestión se encuentra contenido *mutatis mutandis*, en la jurisprudencia 45/2010, cuyo rubro es: “**REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD**”, así como en la tesis XII/2001, cuyo rubro y texto es el siguiente: “**PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES**”. El principio de definitividad establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es aplicable a actos y resoluciones de autoridades distintas de las encargadas de organizar las elecciones. En efecto, el derecho sustantivo es el ejercicio del derecho al sufragio, activo y pasivo. El proceso electoral no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el referido derecho pueda ser ejercido. Como todo proceso, el proceso electoral se integra con una serie de actos sucesivos para lograr el fin indicado. La manera más eficaz para que el proceso pueda avanzar es que exista definitividad en las distintas etapas para que en el plazo de ley el derecho al sufragio se ejercite. Esto implica que los actos del proceso electoral que adquieren definitividad son los que emiten las autoridades encargadas de organizar los comicios, en cada una de las etapas que integran dicho proceso. Por tanto, no es posible legalmente invocar la definitividad respecto de actos provenientes de autoridades distintas de las que organizan las elecciones, o bien, de actos de partidos políticos, etcétera.

De ese modo, también resulta injustificado lo aducido por el actor respecto a que debe conocer, *per saltum*, el presente asunto, porque, en su concepto, fue privado del cargo de Consejero Nacional sin respetar su derecho de audiencia y defensa.

Lo anterior, porque dichas alegaciones son precisamente el fondo del asunto, por lo cual no pueden justificar la procedencia de la acción *per saltum*.

Esto es así, porque las supuestas violaciones al debido proceso se atribuyen a la Comisión Electoral y no con relación a la Comisión Jurisdiccional, tal y como lo disponen los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 3, ambos de la Ley de Medios.

Bajo esa perspectiva, en el caso se estima que, a efecto de garantizar el principio de autodeterminación y auto-organización del partido, es necesario que el actor agote la instancia interna, la cual es la vía idónea para atender su pretensión.

Similar criterio se sostuvo en el juicio ciudadano **SUP-JDC-49/2018**.

No obstante lo anterior, la improcedencia del *per saltum* que solicita el actor no trae como consecuencia necesariamente el desechamiento de la demanda.

Lo anterior, porque a fin de hacer efectiva la garantía de acceso efectivo a la justicia pronta y expedita, que tutela el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución, lo procedente es **reencauzarlo** al recurso de queja contra órgano, competencia de la Comisión Jurisdiccional<sup>6</sup>, para que en plenitud de atribuciones determine lo que proceda conforme a Derecho.

---

<sup>6</sup> Lo anterior, conforme con la tesis de jurisprudencia 1/97, de rubro: “**MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA**”. Disponible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 26 y 27.

En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza del asunto, dicha comisión queda vinculada para resolverlo en el plazo de **24 horas**, contadas a partir de que le sea notificado el presente acuerdo. Hecho lo anterior, deberá informar a esta Sala Superior el cumplimiento dado a la presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remitiendo las constancias con las que acredite dicha circunstancia.

Se apercibe a la Comisión Jurisdiccional, que, en caso de incumplir, se le impondrá una medida de apremio, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General.

Adicionalmente, se señala que lo aquí acordado no prejuzga sobre los requisitos de procedencia del medio de impugnación de que se trata, ni de ser el caso, sobre el estudio de fondo que le corresponda.

### **3. ACUERDO**

**PRIMERO.** Es **improcedente** conocer, *per saltum*, el juicio ciudadano al rubro identificado.

**SEGUNDO.** Se **reencauza** la demanda del juicio ciudadano en que se actúa a recurso partidista de queja contra órgano de la competencia de la Comisión Jurisdiccional, para los efectos precisados en la parte final de este acuerdo.

**NOTIFÍQUESE** como corresponda.

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron el Magistrado Presidente por ministerio de ley Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada



Janine Madeline Otálora Malassis y el Magistrado Indalfer Infante Gonzáles, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**MAGISTRADA PRESIDENTA**

**JANINE M. OTÁLORA MALASSIS**

**MAGISTRADO**

**FELIPE DE LA MATA  
PIZAÑA**

**MAGISTRADO**

**FELIPE ALFREDO FUENTES  
BARRERA**

**MAGISTRADO**

**INDALFER INFANTE  
GONZALES**

**MAGISTRADO**

**REYES RODRÍGUEZ  
MONDRAGÓN**

**MAGISTRADA**

**MÓNICA ARALÍ SOTO  
FREGOSO**

**MAGISTRADO**

**JOSÉ LUIS VARGAS  
VALDEZ**

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

**MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO**